



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 04/09/2020

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00146-00
Medio de control o Acción	Conciliación Extrajudicial
Demandante	Arsenio Sanabria Betancourt
Demandado	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor Juez, paso a su despacho, informándole que la Procuraduría 174 Judicial I Administrativa de esta ciudad, envía el presente expediente de conciliación extrajudicial para su pronunciamiento.

PASA AL DESPACHO
Para analizar eventual aprobación.

CONSTANCIA
Expediente en archivo PDF

ALBERTO OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, cuatro (04) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Radicado	08-001-33-33-014-2020-00146-00
Medio de control o Acción	Conciliación Extrajudicial
Demandante	Arsenio Sanabria Betancourt
Demandado	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.
Juez(a)	Guillermo Osorio Afanador

I. ANTECEDENTES

Mediante solicitud radicada ante la Procuraduría 174 Judicial I para asuntos Administrativos, el señor Arcenio Sanabria Betancourt, a través de apoderado, solicitó se convoque a Conciliación Extrajudicial a la Nación – Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el objeto de conciliar el pago del retroactivo del reajuste de las partidas computables de subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicio, duodécima parte de la prima de navidad, y duodécima parte de la prima vacaciones.

La audiencia de conciliación fue celebrada el 05 de mayo de 2020, en la que estuvieron presentes el apoderado de la parte convocante, abogado RICARDO ROJANO HELD, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.311.716 y T. P 146.812 del C.S. de la J., y en calidad de apoderado de la parte convocada, abogado SAMUEL ANTONIO ORJUELA OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 72.204.086 y T.P. N° 137.728 del C.S. de la J. Ambos apoderados contaban con facultades expresas para conciliar en representación de las partes del proceso de la referencia.

En desarrollo de la diligencia se estableció:

*“(…) En este estado de la diligencia, se insta a las partes para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual, la parte **CONVOCANTE** a través de su apoderado **Dr. RICARDO ROJANO HELD**, manifiesta lo siguiente:*

“Gracias su señoría, manifiesto respetuosamente que me mantengo dentro de las pretensiones iniciales solicitadas en la convocatoria de Audiencia Extrajudicial, que se le hiciere a la Nación- CASUR. Es decir:

“1.- Que la CAJA DE SUELDOS DE RETIROS DE LA POLICÍA NACIONAL revoque los efectos jurídicos del acto administrativo identificado con Radicado No 202010010015981 Id: 533684 del 29 de enero de 2020, por medio del cual la entidad convocada negó la reliquidación retroactiva de la asignación de retiro del señor INTENDENTE ® DE LA POLICIA NACIONAL ARCENIO SANABRIA BETANCOURT. 2.- Consecuencia de la anterior revocatoria, que LA CAJA DE SUELDOS DE RETIROS DE LA POLICÍA NACIONAL reliquide y pague retroactivamente la asignación de retiro al señor ARCENIO SANABRIA BETANCOURT en un (81%) de lo que devenga un INTENDENTE de la Policía Nacional aplicando lo establecido en el decreto 4433 del año 2004, artículo 42 y ley 923 de 2004, artículo 2, numeral 2.4(principio de oscilación), con respecto al reajuste anual y liquidación de la prima de servicios, vacaciones, navidad y subsidio



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

de alimentación desde el 03 de noviembre del año 2012, junto con los intereses e indexación que en derecho corresponda, hasta cuando mediante acto administrativo se reconozca lo pretendido en esta solicitud. 3.- Que se brinde cumplimiento al acuerdo conciliatorio en los términos de los artículos 192 y 195 de la ley 1437 del año 2011. 4.- Que se me reconozca la correspondiente personería jurídica para actuar”

Luego se insta al apoderado de la Convocada Dr. **SAMUEL ANTONIO ORJUELA OCHOA**, para que exponga la posición de la entidad **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL – CASUR**, sobre las pretensiones del convocante, manifestado lo siguiente. **CONVOCADA:** Gracias su señoría, por darme la oportunidad de presentar el concepto del comité de la entidad que represento:

“La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional dentro de la política institucional para la prevención del daño antijurídico, de manera unánime y para los temas referentes a Índice de Precios al Consumidor (IPC), reconoce dichos derechos a todo el personal policial retirado antes del 31 de diciembre de 2004, reajustando los años en los que el IPC fue mayor al principio de oscilación, cuyo incremento se registró durante los años 1.997, 1999, 2001, 2003 y 2004, años benéficos de acuerdo al grado policial con el que hayan obtenido la asignación, destacando que a partir del año 2005 y hasta la fecha, los incrementos efectuados a las asignaciones mensuales de retiro fueron iguales o superiores al IPC.”

“Por tanto, me permito aportar en cuatro (4) folios, copia autentica del acta N° 16 del 16 de enero del 2020, suscrita por el comité de conciliación de **CASUR**, en donde se expresa la voluntad de mi representada en el sentido que **Si le asiste ánimo conciliatorio** en lo atinente al IPC para el personal retirado con anterioridad al 31 de diciembre de 2004. De igual manera se aporta certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación de **CASUR**, por medio de la cual se deja constancia que el comité de conciliación y defensa judicial, mediante acta número 16 del 16 de enero de 2020, **consideró conciliar con el convocante** el reajuste de la asignación mensual de retiro, conforme al índice al IPC, determinó que la misma se haría bajo los siguientes parámetros: que el convocante hubiere adquirido el derecho de asignación de retiro antes del 31 de diciembre del año 2004; no haber presentado demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; presente solicitud de Conciliación Extrajudicial, en la conciliación se tendrá en cuenta los cuatro años de capital aplicándose LA PRESCRIPCIÓN ESPECIAL CONTENIDA EN LOS DECRETOS-LEY 1212 Y 1213 DE 1990, los valores a cancelar se pagarán dentro de los 6 meses siguientes a la aprobación del presente acuerdo conciliatorio por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo y posterior radicación de solicitud de pago ante la entidad que represento; la entidad realizará la liquidación definitiva y se ordenará la cancelación; observando que en el expediente de solicitud de conciliación obra copia simple de la Resolución de asignación de retiro No 1080 del 27 de marzo de 1991 y que le reconoce de asignación de retiro al señor AG ARCENIO SANABRIA BETANCOURT, quien se identifica con la C.C. No 12.273.590, y copia simple de la hoja de servicios No. 12273590 del 28/08/2012 en donde se deja constancia que la última unidad de trabajo del convocante se encuentra ubicada en el DEPARTAMENTO DE POLICÍA; por lo que reúne las exigencias contenidas en el acta del comité de conciliación de mi representada y antes enunciadas, acorde a lo anterior, se ofrece conciliar las pretensiones del convocante en lo atinente al IPC. Me permito aportar liquidación (origina) digitalizada, de fecha 04 de mayo de 2020, suscrita por INGRID RODRIGUEZ y TANIA ANDRADE de la Oficina del Grupo de Negocios Judiciales de CASUR, en 7 folios. Lo anterior de conformidad con los artículos 244 a 246 del CGP. Anexo en físico, la Liquidación con los valores indexados a cancelar. La Liquidación arriba enunciada a continuación la podemos resumir así:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

LIQUIDACION E INDEXACION DE PARTIDAS COMPUTABLES NIVEL EJECUTIVO QUE SE DEBE CANCELAR AL SEÑOR SANABRIA BETANCOURT ARCENIO 12.273.590. **CONCILIACION** Valor de Capital Indexado **4.916.481**. Valor Capital 100% 4.630.433 Valor Indexación 286.048 Valor indexación por el (75%) 214.536 Valor Capital más (75%) de la Indexación 4.844.969 Menos descuento CASUR -185.446 Menos descuento Sanidad -168.954 **VALOR A PAGAR: \$4.490.569**

*En los anteriores términos al comité de conciliación y defensa jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, determina que para el presente asunto **SI le asiste ánimo conciliatorio.***

La parte convocante aceptó la propuesta presentada por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO:

El señor Agente del Ministerio Público avaló el acuerdo conciliatorio manifestado que "(...) Atendiendo lo expresado por las partes en la presente diligencia, encontramos que el acuerdo a que han llegado las partes, no atenta contra el interés jurídico, ni contra el derecho o la justicia, y que además no se están desconociendo garantías fundamentales a las partes, en tanto, no existe detrimento patrimonial para el Estado, contrario Sensu, se le reporta provecho a la entidad convocada y a la descongestión judicial, habida cuenta que la convocante renuncia a cualquier otro reclamo judicial o extrajudicial que pudiese haberse generado entre las partes sobre el presente asunto; y la misma se encuentra avalada por el comité de conciliación de la Entidad convocada. Considera entonces este despacho delegado del Ministerio Público, que la conciliación cumple con los siguientes requisitos: (i) la eventual acción contenciosa que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59, ley 23 de 1991, y 70, ley 446 de 1998); (iii) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo a saber; (v) En criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las anteriores razones. (Art. 65 A, ley 23 de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998). Por lo anterior procede a declarar esta conciliación no sin antes dejar expresa constancia que tal como lo establece el parágrafo 2 del Art. 2 del Decreto 1716 de 2009 (subrogado por el decreto 1069 de 2015) reglamentario de la Ley 1285 de 2009 en el presente acuerdo se respetaron los derechos laborales del convocante por ser estos ciertos e indiscutibles. Además el medio de control a incoar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no ha caducado y lo acordado se encuentra soportado en pruebas documentales obrantes en la solicitud, y copia del certificado expedido por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR**, en la que se da cuenta de las consideraciones concretas del comité frente al caso y las condiciones del acuerdo, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad vigente esto es la Ley 640 de 2001 donde se señala los requisitos que deben quedar consignados en la respectiva acta de conciliación. Conviene precisar, que si bien la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de **la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR**, ha sido aportada en copia simple, ello a consideración de esta Agencia del Ministerio Público, en modo alguno riñe con la normatividad y jurisprudencia vigentes, habida cuenta que de conformidad con el artículo 246 del CGP, las copias simples tendrán el mismo valor del original, y en el mismo sentido, el Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2013, apoyándose en la nueva normatividad procesal y en el principio constitucional de la buena fe, unificó la

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

jurisprudencia en esta materia y decidió otorgarle valor probatorio a los documentos aportados en copia simple a un proceso, y sobre los cuales se ha surtido el principio de contradicción y no han sido tachados de falsos ni se ha controvertido su contenido. Igualmente con el acuerdo logrado, no se vulnera el patrimonio público y se respeta el ordenamiento jurídico, por lo que este Despacho DECLARA LA CONCILIACIÓN en los términos ya referidos anteriormente.”

II. CONSIDERACIONES

Este Juzgado, en cumplimiento de lo establecido en las normas legales sobre conciliación, contenidas en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y decreto reglamentario 1716 de 2009, pasa a revisar el acuerdo conciliatorio de la referencia, a fin de determinar si procede o no su aprobación.

De haberse desatado un conflicto judicial entre las partes, sería de contenido patrimonial, y podría ser dilucidado ante esta Jurisdicción, a través del medio de control correspondiente, por lo que cumple con el requisito de procedibilidad de que habla el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.

2.1. Conciliación extrajudicial efectuada

La conciliación extrajudicial que se trae a este Despacho Judicial, celebrada el 05 de mayo de 2020, ante la Procuraduría 174 Judicial I para asuntos Administrativos, lo es en relación con el reconocimiento y pago del retroactivo del reajuste de las partidas computables subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicio, duodécima parte de la prima de navidad, y duodécima parte de la prima vacaciones, de la asignación del retiro del señor Arcenio Sanabria Betancourt.

Se concilió la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE (\$4.490.569).

2.2. Consideraciones del Ministerio Público

El Delegado del Ministerio Público ante quien se surtió la presente conciliación extrajudicial, avaló el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes y solicitó al despacho que conociera de la misma, impartir aprobación, tomando como fundamento que existen pruebas suficientes para ello y que además dicho acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento ya que se encuentra establecido que el pago se realizará una vez ejecutoriado el auto que aprueba la conciliación, el acuerdo se ajusta al ordenamiento legal y no resulta lesivo para el patrimonio público.

2.3. Requisitos para la aprobación de las conciliaciones extrajudiciales.

La Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, fue introducida en nuestra legislación por la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015; además, por la Ley 1285 de 2009 mediante la cual se reformó la Ley 270 de 1996. En los procesos contenciosos administrativos sólo es procedente en los conflictos de carácter particular y de contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En la Parte III, Título I, Capítulo 2, de la Ley 446 de 1998, se establecen las normas generales aplicables a la conciliación contenciosa administrativa, y en relación con los

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

aspectos sustanciales necesarios para aprobar un acuerdo conciliatorio, el artículo 73 dispone:

“Art. 73. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así:
“Artículo 65 A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única. (...)”

La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público” (negrilla fuera de texto).

El H. Consejo de Estado, en providencia del 20 de febrero de 2014¹, señaló, reiterando la posición que ha mantenido al respecto, que la conciliación se encuentra sometida a los siguientes supuestos de aprobación²:

“8. El artículo 73 de la Ley 446 de 1998, establece que la autoridad judicial *“(...) improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”* y el parágrafo segundo del artículo 81 de la misma ley – modificadorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991- dispone que *“No habrá lugar a conciliación cuando la acción correspondiente haya caducado”*.

De acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son:

- Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.
- Que las entidades estén debidamente representadas.
- Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto del convenio.
- Que no haya operado la caducidad de la acción.
- Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.
- Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrojado a la actuación.
- La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada (art. 81, L. 446 de 1998, art.63, Decreto 1818 de 1998).”

2.4. CASO CONCRETO

Revisado el expediente, se advierte que en el mismo se encuentran las siguientes pruebas arrojadas con la solicitud:

¹ H. CONSEJO DE ESTADO. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Providencia 20 de febrero de 2014, Expediente Radicación N°. 25000232600020100013401 (42.612). C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

² Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003, Sección Tercera.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

- Poder para actuar con la facultad expresa de conciliar.
- Derecho de petición presentado ante CASUR por el señor Arcenio Sanabria el 12 de diciembre de 2019.
- Copia del Oficio No. número 202010010015981 Id: 533684 de fecha 29 de enero de 2020, proferido por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL; decisión administrativa por medio de la cual negó la petición presentada por el convocante.
- Copia de Hoja de Servicios No. 12273590 emanada por la Dirección de Personal de la Policía Nacional del señor Arcenio Sanabria Betancourt.
- Resolución 18703 del 06 de noviembre de 2012, por medio del cual se le reconoce una asignación de retiro al señor Arcenio Sanabria Betancourt.

Asimismo, en desarrollo de la audiencia de conciliación fueron allegados los siguientes documentos:

- Poder otorgado con copia autenticada de certificado de representación legal.
- Copia del Certificado de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación del 05 de mayo de 2020.
- Cuadro de Pre-liquidación de la indexación del IPC.
- Cuadros de reajustes propuestos por CASUR.

Este Despacho de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 73 y 81 de la Ley 446 de 1998 al igual que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, pasará a revisar el acuerdo conciliatorio en comento.

Ahora bien, realizadas las acotaciones anteriores, advierte el Despacho que el trámite conciliatorio bajo estudio, es susceptible de aprobación, por lo siguiente:

Para el Juzgado es claro que de haberse desatado un conflicto judicial entre las partes, éste sería de contenido patrimonial, y podría ser dirimido ante esta Jurisdicción, a través del medio de control contencioso administrativo establecido para tal efecto, por tratarse de diferencias suscitadas en virtud de una relación laboral. Por consiguiente, cumple con el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 37 de la Ley 640 de 2001.

Así mismo, la conciliación fue suscrita entre los apoderados especiales de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y del señor Arcenio Sanabria Betancourt, quienes otorgaron a sus apoderados judiciales la facultad de conciliar, por lo que estuvieron debidamente representadas en el trámite conciliatorio.

Ante la Procuraduría 174 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla fueron allegados por la parte convocante los documentos que acreditan que con el acuerdo conciliatorio no se generaría lesión a intereses patrimoniales del Estado.

En efecto estima el Despacho que el acuerdo conciliatorio está lo suficientemente sustentado, en la medida que obra en el expediente copia de la Resolución 18703 del 06 de noviembre de 2012, por medio de la cual se reconoce una asignación de retiro al señor Arcenio Sanabria Betancourt.

Sobre este requisito es pertinente señalar que pese a que la pensión es un derecho irrenunciable, y que por tanto, en principio no procede la conciliación prejudicial, se ha entendido que cuando no se menoscaban los derechos irrenunciables, sino que por el

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

contrario, la conciliación prejudicial protege el derecho, se concluye la procedencia de la conciliación prejudicial.

En el presente caso, no se están desconociendo derechos irrenunciables en la medida que el capital adeudado por concepto de mesadas pensionales se reconoce en un 100%, conciliando las partes sólo en relación con la indexación, la cual, puede conciliarse por tratarse de un derecho puramente económico. En este último punto, se concilió el pago del 81%.

Al respecto, estima el Despacho pertinente citar el pronunciamiento del H. Consejo de Estado en la materia, cuyas consideraciones resultan aplicables a la presente *litis*.

“Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen por no escritas y no pueden oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del derecho irrenunciable.”³

(...)

Así las cosas, siendo legal en sí misma la audiencia de conciliación como etapa procesal, se debe reiterar que: “Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se llegare a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental”⁴

Así en cada caso se debe analizar si la conciliación conllevó realmente a “allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho.”⁵

Por tanto se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido^{6,7}

Además, como prueba de los valores conciliados se encuentra el Certificado del Comité de Conciliación de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y obra liquidaciones del valor a reajustar.

Así las cosas, el acuerdo conciliatorio no sólo encuentra fundamento probatorio, sino que encuentra asidero jurídico, en la medida que parte de la consideración que las asignaciones de retiro deben actualizarse con base en el IPC, cuando éste incremento resulta más favorable que el principio de oscilación, teniendo como límite máximo la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, momento a partir del cual opera nuevamente dicho principio.

³ Sentencia T-1008-99 del 9 de diciembre de 1999, M.P José Gregorio Hernández Galindo.

⁴ T-232 de 1996, M.P Alejandro Martínez Caballero.

⁵ T-677 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

⁶ T-677 de 2001, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra

⁷ Consejo de Estado. Sección Segunda. Providencia de 14 de junio de 2012. Radicación número 25000-23-25-000-2008-01016-01 (1037-11). C.P Gerardo Arenas Monsalve.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Pasa a continuación el Despacho a referirse al marco normativo aplicable al reajuste de la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y las partidas que integran dicha prestación:

El artículo 49 del Decreto 1091 de 1995 “Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”, determina cuáles son las partidas computables dentro de las prestaciones causadas por el retiro del servicio del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así:

“Artículo 49. Bases de liquidación. A partir de la vigencia del presente decreto, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del servicio activo, se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas.

- a) Sueldo básico;*
- b) Prima de retorno a la experiencia;*
- c) Subsidio de Alimentación;*
- d) Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad;*
- e) Una duodécima parte (1/12) de la prima de servicio;*
- f) Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones;*

Parágrafo. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en los decretos 1212 y 1213 de 1990 y en el presente decreto, serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensionados, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.”

Por su parte, el Decreto 4433 de 2004 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”, en su artículo 23, ratifica las partidas computables dentro de las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública, al consagrar:

“Artículo 23. Partidas computables. La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:

23.1 Oficiales, Suboficiales y Agentes

23.1.1 Sueldo básico.

(...)

23.2 Miembros del Nivel Ejecutivo

23.2.1 Sueldo básico.

23.2.2 Prima de retorno a la experiencia.

23.2.3 Subsidio de alimentación.

23.2.4 Duodécima parte de la prima de servicio.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

23.2.5 Duodécima parte de la prima de vacaciones.

23.2.6 Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones, y las sustituciones pensionales..”

Posteriormente, se emitió el Decreto 1858 de 6 de septiembre de 2012 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, estatuto que en su artículo 3º consagró en materia de partidas computables, lo siguiente:

“Artículo 3º. Fíjanse como partidas computables de liquidación dentro del régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó a la institución antes del 1º de enero de 2005, previsto en el presente decreto, las siguientes:

- 1. Sueldo básico.*
- 2. Prima de retorno a la experiencia.*
- 3. Subsidio de alimentación.*
- 4. Duodécima parte de la prima de servicio.*
- 5. Duodécima parte de la prima de vacaciones.*
- 6. Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.”.*

Son estas partidas que por disposición legal están llamadas a ser incluidas dentro de la asignación de retiro como parte integral de esta prestación. En otro aspecto, es pertinente señalar que el principio de oscilación de las asignaciones de retiro y de las asignaciones y pensiones del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, fue consagrado en el artículo 56 del Decreto 1091 de 1995, así:

“Artículo 56. Oscilación de asignaciones de retiro y pensiones. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. El personal del nivel ejecutivo o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley”.

Posteriormente, el Decreto 4433 de 2004, dispuso respecto del mecanismo de oscilación de asignaciones de retiro y pensión:

“ARTÍCULO 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

*a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública,
a menos que así lo disponga expresamente la ley.”.*

De conformidad con las disposiciones en cita, se colige que las asignaciones de retiro y pensiones de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, deben ser incrementadas de forma anual en la misma proporción en que se acrecientan las asignaciones de quienes están en servicio activo, para efectos de evitar que pierdan su valor adquisitivo.

Al respecto, es importante traer a colación lo dispuesto en un pronunciamiento reciente por el H. Consejo de Estado y que constituye postura unificada en la materia:

“La Sala manifiesta que de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia del 17 de mayo de 2007, ha insistido en que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de retiro, anualmente, y teniendo en cuenta la Ley 238 de 2005. En consecuencia, el reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tiene lugar de conformidad con el IPC, en tanto resulta más favorable que el resultante de la aplicación del principio de oscilación. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, el reajuste no se hace más de acuerdo con el IPC, sino aplicando el índice de oscilación previsto en el artículo 42 de aquel decreto, pero en todo caso, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con base en la variación porcentual del IPC respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

- Una interpretación contraria desconocería los artículos 48 (inciso 6) y 53 (inciso 3) de la Constitución, que contemplan el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada, el cual, en últimas, es un desarrollo del derecho a la igualdad, de la protección especial sobre las personas de la tercera edad, de la protección al mínimo vital y móvil. Una prestación pensional es el medio que permite amparar a un trabajador de las contingencias a las que se puede enfrentar en desarrollo de su actividad laboral (vejez, invalidez, muerte), entonces, negar el derecho a su reajuste afectaría su capacidad de subsistencia y la de su entorno familiar. Para respaldar este argumento, la Sala cita la sentencia T-020 de 2011, del magistrado ponente Humberto Sierra Porto, de la Corte Constitucional.

- La posición de la Sala no genera un doble reajuste. Además, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 promueve el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, en ningún caso, este principio puede servir de excusa para desconocer derechos adquiridos como el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares.”⁸

Asimismo, encontramos que el Gobierno Nacional para la Vigencia 2019 expidió el Decreto 1002 del 06 de junio de 2019, por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de la fuerza pública, entre otros, disposición que estableció un ajuste de los salarios y prestaciones del 4.5% retroactivo a partir del 1° de enero 2019.

Adicionalmente, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, dispuso la realización del reajuste porcentual del monto de las partidas que desde su génesis permanecieron fijas en la prestación reconocida, de acuerdo con la base de liquidación que conforman la

⁸ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Fecha: 15 de noviembre de 2012 Radicación número: 2500023250002010005111 01.

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, actualización que se realiza a partir del reconocimiento y que se evidencia en la prestación a partir del 1° de enero de 2019, tal como se aplicó en el caso del convocante.

En razón de tales fundamentos fácticos y jurídicos puede concluirse que el acuerdo conciliatorio no resulta lesivo para el patrimonio público, sobre todo considerando que se está aplicando la respectiva prescripción trienal, conforme al artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

Así las cosas, este operador judicial considera que resulta procedente impartir aprobación al acuerdo conciliatorio en cuanto a que no hay renuncia de derechos laborales ciertos; se tiene que la conciliación presentada no está viciada de nulidad y que verificado que se reúnen las condiciones legales para su aprobación, en cuanto a que este operador judicial tiene competencia para ello, no opera el fenómeno de la caducidad, que se estableció lo concerniente a la prescripción cuatrienal, fueron determinadas las formas de pago, se allegó constancia del Comité de Conciliación y las partes están legitimadas para conciliar, adicionalmente, la entidad convocada se compromete a pagar al señor **ARCENIO SANABRIA BETANCOURT**, el retroactivo del reajuste del 4.5% de las partidas computables de subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicio, duodécima parte de la prima de navidad, y duodécima parte de la prima vacaciones que integran su asignación de retiro, en la forma como fue pactado ante la Procuraduría 174 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla, con la aclaración de que la aprobación que hace el Juzgado es en los mismos términos en que fue autorizada por el comité de conciliación. Es decir, en cuanto a que la conciliación comprende el pago del 100% del capital adeudado y el 75% de la indexación.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Catorce (14) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,

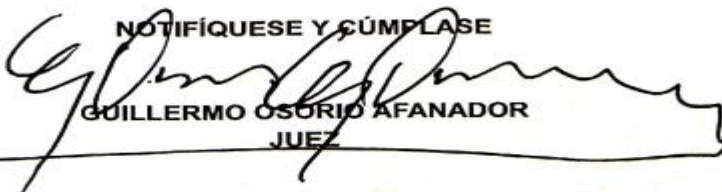
RESUELVE:

PRIMERO. – APROBAR el acuerdo conciliatorio suscrito por el señor ARCENIO SANABRIA BETANCOURT y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, el día cinco (05) de mayo de dos mil veinte (2020) ante el Procurador 174 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla, conforme a las razones anotadas en esta providencia.

SEGUNDO. – Por Secretaría, se expedirán las copias respectivas con constancia de su ejecutoria.

TERCERO.- Ejecutoriado este auto y surtido el trámite anterior, háganse las respectivas anotaciones en el sistema y archívese el expediente.

CUARTO: Notificar el presente auto por estado electrónico, de la forma prevista en el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

Nº **097** DE HOY **07/09/2020** A LAS 8:00 A.M.

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA